



CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y DIGITALIZACIÓN

Comunidad de Madrid

ORDEN

Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original.

Exp.: A/OBR-024556/2021

Unidad administrativa:

ÁREA DE CONTRATACIÓN

ORDEN 4/2023 DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN POR LA QUE SE CONCEDE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO TITULADO “ACONDICIONAMIENTO DE CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE PERALES”.

Antecedentes

Por Orden de la Consejería de Administración Local y Digitalización nº 335/2022 de fecha 18 de julio de 2022, se adjudicó el contrato a la empresa SERVICIOS INTEGRALES ALJI, S.L., para la ejecución de la actuación denominada “ACONDICIONAMIENTO DE CEMENTERIO” en el municipio de Villanueva de Perales, por el importe de 113.096,87 euros, estableciéndose un plazo de ejecución de 3 meses.

El 7 de septiembre de 2022 se levanta acta de no inicio por encontrarse pendientes los Planes de Obra y Plan de Seguridad y Salud, siendo por tanto la fecha de terminación inicial el 19 de octubre de 2022. Con fecha 13 de octubre de 2022 es cuando se levanta acta de comprobación de replanteo y de inicio de las obras, y comienza a contar el plazo de ejecución, debiendo estar finalizados los trabajos el día 13 de enero de 2023.

Con fecha 16 de diciembre de 2022, se recibe petición de la Directora facultativa de la obra, en donde se solicita la ampliación del plazo de ejecución por un mes adicional (hasta 13 febrero de 2023).

La solicitud de ampliación del plazo de ejecución se fundamenta en que “Debido a las condiciones climatológicas de las últimas semanas nos hemos visto obligados a paralizar los trabajos en el acondicionamiento del Cementerio hasta mejora de las mismas para poder reanudar”.

Visto el informe emitido por el Área de Equipamientos Urbanos, de fecha 19 de diciembre de 2022, en donde se informa favorablemente la ampliación del plazo y se exime al contratista de penalizaciones y aumento de gastos generales o de cualquier otra índole.

Fundamentos

La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en su artículo 195.2, establece que “Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.”

De ello se deduce que es posible ampliar el plazo de ejecución de un contrato, siempre y cuando el retraso en la ejecución no sea imputable al contratista, teniendo en cuenta que debe certificarse por parte del Responsable del Contrato tal extremo, obligación que recae sobre el Director de Obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público; *Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que*



corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246.

En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, la Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general, para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra.

En el presente caso, en la solicitud de ampliación de plazo formulada por el Director de Obras, en fecha 16 de diciembre de 2022, se deja constancia de que las causas del retraso no son imputables al contratista y que no resulta posible cumplir el ritmo de obra inicialmente previsto.

El artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, señala que:

“La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo.

Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato.”

De conformidad con lo expuesto en los antecedentes y con la documentación que obra en el expediente,



Resuelvo

Acordar, en el expediente de contratación de las obras para la “ACONDICIONAMIENTO DE CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE PERALES”, la concesión de la ampliación de plazo de un mes solicitada por la Dirección Facultativa fijando como nueva fecha de finalización del contrato la del día **13 de febrero de 2023**

En Madrid, a la fecha de la firma
EL CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN
P.D. Orden de 5 de septiembre de 2019 (BOCM 10/09/2019)
EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

Firmado digitalmente por: MIRANDA DE LARRA ARNAIZ ALEJO JOAQUÍN
Fecha: 2023.01.12 17:24

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso especial en materia de contratación en el plazo de 15 días o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y SS de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En los términos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso podrá interponerse o en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso.